



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral

Radicación: 05001-31-05-010-2014-01047-02

Demandante: **Juan Guillermo Londoño Bolívar,**
Gildardo Holguín sucedido procesalmente por
Magdalena Naranjo de Hincapié, Sandra Milena y
Andrés Fernando Holguín Martínez
Los herederos determinados de **Luis Fernando**
Londoño Bolívar, Luis Esteban, Verónica y Juan
Felipe Londoño Serna, Johana Marcela y Edwin
Fernando Londoño Cifuentes, último menor de edad
representado por la señora por Zoraida Cifuentes

Demandado: Colpensiones, Ester Julieta Velásquez González, Olga
Rocío Velásquez González, David Velásquez
Echeverri y Diego Mauricio Velásquez González, como
herederos determinados de Julieta González y Antonio
Velásquez Lara y los herederos indeterminados.

Asunto: Apelación sentencia

Procedencia: Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín

Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique

Temas: Contrato de Trabajo, carga de la prueba.

Medellín, abril veintiocho (28) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORARES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, decide el recurso de **apelación** interpuesto por la apoderada de la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2022, en el proceso ordinario laboral de la referencia, seguido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-010-2014-01047-02

1.- ANTECEDENTES

Los señores JUAN GUILLERMO LONDOÑO BOLÍVAR, GILDARDO HOLGUÍN y los herederos del señor LUIS FERNANDO LONDOÑO BOLIVAR, Luis Esteban, Verónica y Juan Felipe Londoño Serna, Jhoana Marcela y Edwin Fernando Londoño Cifuentes representados por Zoraida Cifuentes, llamaron a juicio ordinario laboral a COLPENSIONES, DIEGO MAURICIO VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, los herederos indeterminados y determinados de los señores JULIETA GONZÁLEZ y ANTONIO VELÁSQUEZ LARA, Ester Julieta, Olga Rocío y Diego Mauricio Velásquez González, al cual se vinculó por pasiva al señor DAVID VELASQUEZ ECHEVERRI, pretendiendo se declare que entre el señor **Juan Guillermo Londoño Bolívar** y Antonio Velásquez Lara, existió un contrato de trabajo a término indefinido celebrado el 1º de marzo de 1976, sustituido a los señores Diego Mauricio Velásquez González y Julieta González, a partir del 6 de julio de 1992 y que se encuentra vigente; subsidiariamente se declare la existencia del contrato entre Juan Guillermo Londoño Bolívar y Antonio Velásquez Lara, desde el 1º de marzo de 1976 al 5 de julio de 1992 y entre Juan Guillermo Londoño Bolívar y los demandados Diego Mauricio Velásquez González y Julieta González, desde el 6 de julio de 1992 a la fecha; se condene a los demandados a reconocer los aportes a la seguridad social por todo el tiempo

laborado, los que deberán ser recibidos por Colpensiones y se condene a Diego Mauricio Velásquez González y Julieta González a pagar al señor Juan Guillermo Londoño Bolívar las cesantías, intereses sobre las mismas y las primas de servicio por todo el tiempo laborado, así como la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo o la indexación y la sanción por no consignación de las cesantías.

Igualmente, se solicita se declare que entre el señor **Gildardo Holguín** y los demandados Diego Mauricio Velásquez González y Julieta González, existe un contrato de trabajo a término indefinido que inició el 5 de febrero de 1995 y se encuentra actualmente vigente y en consecuencia, se condene a los empleadores al pago de los aportes a la seguridad social, cesantías, intereses a las cesantías y primas de servicio, por todo el tiempo laborado, así como las sanciones del artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo y el numeral tercero del artículo 99 de la ley 50 de 1990.

Importa a la Sala reseñar que el señor Gildardo Holguín falleció en el trámite del proceso, el 22 de mayo de 2016 y fue sucedido procesalmente por Magdalena Naranjo de Hincapié, Sandra Milena y Andrés Fernando Holguín Martínez

Y respecto al señor **Luis Fernando Londoño Bolívar** se pretende se declare que entre este y el señor Antonio Velásquez Lara, existió un contrato de trabajo indefinido a partir del 01 enero de 1980, sustituido patronalmente a los señores Diego Mauricio Velásquez González y Julieta González el 6 de julio de 1992 y hasta el 1º de julio de 2013, fecha de su fallecimiento o subsidiariamente se declare que entre el señor Luis Fernando Londoño Bolívar y el señor Antonio Velásquez Lara existió un contrato indefinido desde el 1º de enero de 1980 y el 5 de julio de 1992, y que entre el mismo y los señores Diego Mauricio Velásquez González y Julieta González existió un contrato de

trabajo entre el 06 de julio de 1992 y el 01 de julio de 2013, consecuentemente se condene a la pasiva a pagar a Verónica Londoño Serna, Juan Felipe Londoño Serna y a Jhoana Marcela Londoño Cifuentes y Edwin Fernando Londoño Cifuentes, representado legalmente por su madre Zoraida Cifuentes, los aportes a la seguridad social, cesantías, intereses a las cesantías y primas de servicio, por todo el tiempo laborado, así como las sanciones del artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo y el numeral tercero del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento del señor Luis Fernando Londoño, a sus hijos menores Jhoana Marcela Londoño Cifuentes y Edwin Fernando Londoño Cifuentes a partir del 1 de julio de 2013, con los respectivos intereses moratorios.

Los anteriores pedimentos se sustentan en los siguientes supuestos fácticos que el señor **Juan Guillermo Londoño Bolívar**, celebró contrato de trabajo verbal con el senior Antonio Velásquez Lara que tuvo vigencia desde el 1º de marzo de 1976, en el cargo de vaquero - administrador de la Hacienda La Sultana, de explotación ganadera ubicada en el Municipio de Bolivar, Santander, devengando un salario mínimo legal, más beneficios en especie consistente en la vivienda en la misma finca que administraba, que el 5 de julio de 1992 el señor Antonio Velásquez Lara y la señora Julieta González quien fuera su cónyuge, realizaron partición de bienes asignando la propiedad de la hacienda a la señora Julieta González, que el señor Antonio Velásquez Lara liquidó al demandante las prestaciones sociales causadas hasta ese momento y a partir de este momento la administración de la hacienda quedó a cargo la señora Julieta González y de su hijo Diego Mauricio Velásquez González, que el accionante continuó prestando sus servicios sin interrupción hasta la fecha y ejerciendo la misma labor, que desde el 5 de julio de 1992 el trabajador no volvió a recibir ningún pago por prestaciones sociales y que no fue afiliado al sistema de seguridad social integral sino a partir del 1 de enero de 1999 al ISS hoy COLPENSIONES a través de Diego Mauricio Velásquez Gonzalez

realizando aportes inconstantes e interrumpidos, que el salario de 2010 a 2012 fue equivalente a \$800.000 y para el año 2013 fue la suma \$850.000.

Asimismo se narra que el señor **Gildardo Holguín** celebró contrato de trabajo verbal con la señora Julieta González y Diego Mauricio Velásquez González, a partir del 5 de febrero de 1995 y actualmente se encuentra vigente, en el cargo de oficios varios, bajo continúa subordinación y dependencia, cumpliendo horarios, recibiendo órdenes e instrucciones, así como llamados de atención directamente por la señora Julieta González y su hijo Diego Mauricio Velásquez Gonzalez o a través del señor Luis Guillermo Londoño quien es su jefe inmediato y administrador de la finca, el salario devengado siempre ha sido del mínimo legal, recibiendo salario en especie consistente en la residencia en la misma hacienda, no ha sido afiliado a fondo de pensiones alguno, ni ha recibido pago alguno por concepto de prestaciones sociales

Igualmente, se dijo que el señor **Luis Fernando Londoño Bolívar**, celebró contrato de trabajo verbal con el señor Antonio Velásquez Lara, el cual tuvo vigencia desde el 1° de enero de 1980, en el cargo de vaquero de la Hacienda La Sultana, devengando un salario mínimo legal, más beneficios en especie consistente en la vivienda en la misma finca, que el 5 de julio de 1992 el señor Antonio Velásquez Lara liquidó al señor Luis Fernando Londoño Bolívar las prestaciones sociales causadas hasta ese momento y el señor Luis Fernando Londoño Bolívar continuo prestando sus servicios sin interrupción, ejerciendo la misma laboral en la misma Hacienda La Sultana para la señora Julieta González y su hijo Diego Mauricio Velásquez González, y a partir de esa fecha el trabajador no volvió a recibir ningún pago por prestaciones sociales nunca fue afiliado a fondo de pensiones alguno y que el señor Luis Fernando Londoño Bolívar falleció el día 1 de julio de 2013, fecha para la cual aún estaba vigente el vínculo laboral, que por no encontrarse afiliado al sistema de seguridad social integral todos los gastos médicos y de entierro debieron ser

asumidos por sus familiares, le sobreviven en calidad de herederos Luis Esteban Londoño Serna, Verónica Londoño Serna, Juan Felipe Londoño Serna, Jhoana Marcela Londoño Cifuentes Y Edwin Fernando Londoño Cifuentes todos en calidad de hijos del fallecido e igualmente se sobreviven en calidad beneficiarios de la pensión de sobrevivientes los hijos menores de edad Jhoana Marcela Londoño Cifuentes Y Edwin Fernando Londoño Cifuentes, nacidos el 23 de julio de 1996 y 9 de noviembre de 2004, respectivamente. Los demás hijos son mayores de edad, sin discapacidad alguna y no se encuentran estudiando.

1.2.- CONTESTACIÓN

Colpensiones

Al replicar la demanda(*Anexo008.ContestaciónDeDemanda.pdf*), la administradora pensional sostuvo que no le constan los hechos, siendo situaciones que se deberán probar en el proceso por la parte que los expresa, conforme lo establecen los artículos 1757 del Código Civil y 177 del Código de Procedimiento Civil. A su vez propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de cobro jurídico artículo 24 Ley 100 de 1993; imposibilidad de condena en costas; prescripción y compensación.

Curador ad litem de los accionados

Cumplidas la diligencias de citación y aviso, sin que comparecieran los accionados se ordenó el emplazamiento y se designó curador ad litem a los herederos indeterminados y determinados de los señores JULIETA GONZALEZ Y ANTONIO VELASQUEZ y a los señores DAVID VELÁSQUEZ ECHEVERRI Y DIEGO MAURICIO VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, quien una vez notificado se pronunció para afirmar que no le

constan los hechos y se atiende a lo que se pruebe en el proceso y de mérito excepcionó falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 31 de octubre de 2022, el Juzgado de conocimiento absolvió a los demandados de la totalidad de las pretensiones incoadas por los demandantes Juan Guillermo Londoño Bolívar, Gildardo Holguín a través de sus sucesores procesales y los herederos determinados de Luis Fernando Londoño; declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación y condenó en costas a los demandantes.

1.4.- RECURSO DE APELACION

La activa interpone el recurso de apelación, solicitando se revoque la decisión de primer grado, argumentando que la carga probatoria de los extremos de la relación laboral no puede trasladarse, en el caso particular, de manera absoluta a los demandantes, en tanto, se trató por todos los medios de convocar a los demandados al proceso, quienes en mayor medida podían aportar los medios de prueba a fin de dilucidar los extremos de inicio y finalización de la relación laboral, así como la falta de cotización y el pago de las pretensiones que se persiguen en la demanda. Expone que en manos de los demandantes no reposaba ninguna de las pruebas porque las labores que se realizaban en la finca “La Sultana”, eran contratadas de manera verbal e incluso el señor Guillermo Londoño aun trabaja en la finca. Insiste en los demandados debieron colaborar con la administración de justicia y contrario a ello hicieron caso omiso de la citación.

Resalta que los testigos traídos a la audiencia son personas desprevenidas, desprovistas de interés y a pesar de su escasa formación, dan a conocer una

situación real, pues el señor Norberto Villareal indicó que conoció al señor Guillermo- desde hace 35 años, que lo ve todos los días, hasta hoy, trabajando en la finca y si bien no se precisa una fecha exacta si da luz para establecer los extremos por aproximación, ello fue corroborado por el interrogatorio del codemandante donde afirmó que no ha laborado a ninguna otra parte, afirma que los dos testigos dijeron que el señor Juan Guillermo aun labora en este sitio. También expone que en la historia laboral hay vacíos enormes en las cotizaciones y es claro que las prestaciones que se reclaman no podían estar inmersas en la prescripción porque todavía el señor Juan Guillermo es trabajador y se encuentra vigente la relación.

Respecto al señor Gilberto Holguín y Luis Fernando Londoño, refiere que los testigos no fueron precisos en señalar unos extremos, pero la señora Lubidia Molina indica que se separó del señor Gildardo cuando sus hijos tenían 10 y 6 años y bien podría fijarse esa fecha como inicio de la relación laboral, además la declarante indicó que para esa fecha ya llevaban muchos años en la finca La Sultana, asegurando que ello da entender que es cierto lo indicado por el codemandante Juan Guillermo sobre la fecha de inicio de la relación, esto es 1995., la cual duró hasta la fecha del deceso del señor Holguín. Frente al señor Luis Fernando, de igual forma acepta no hay claridad en los testigos, pero puede tomarse el interrogatorio de parte del señor Guillermo en el que se afirma que inició en 1984 y laboró hasta su deceso.

Reitera que no se configura la prescripción- porque el señor Juan Guillermo labora aun en la finca, Luis Fernando falleció en el 2013 y el señor Gildardo falleció en el año 2016 y rememora que las cotizaciones a seguridad social en pensiones no son prescriptibles.

1.5. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos Colpensiones emitió pronunciamiento solicitando se confirme la sentencia de primer grado, toda vez que, la parte demandante no logra probar que le asiste derecho a la declaratoria de una relación laboral frente a los demandados: Antonio Velásquez Lara, Julieta González Diego Mauricio Velásquez González; Esther Julieta Velásquez González, Olga Rocío Velásquez González y David Velásquez Echeverry, y por lo tanto a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, no le asistía la obligación de registrar y aceptar aportes o cotizaciones, en virtud del contrato de trabajo o el vínculo laboral. Igualmente solicita se condene en costas a los demandantes en favor de Colpensiones dado que, pese a no asistirles derecho, los accionante llamaron a juicio a la entidad por lo que objetivamente deberá imponerse dicho concepto.

Por su parte, la apoderada de la parte actora, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia, reiterando para ello los argumentos esbozados en la sustentación del recurso de alzada, destacando, que la parte demandada ha sido dolosamente displicente en acudir ante el operador judicial, pese a tener conocimiento del proceso, defraudado de esta manera los intereses de los demandantes.

Sostuvo que contrario a lo señalado por el A quo, al interior del proceso, sí se demostró la existencia de la relación laboral entre el señor Juan Guillermo, Luis Fernando y Gildardo, respecto de Diego Mauricio Velásquez González, quien sustituyó patronalmente a su madre, Julieta González, quien a su vez sustituyó a Antonio Velásquez Lara.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

-Que el señor Luis Fernando Londoño Bolívar falleció el 01 de julio de 2013, tal como se acredita con el registro civil de defunción aportado a folios 111 del anexo *001Demanda .pdf*

-Que a su vez el codemandante Gildardo Holguín falleció el 22 de mayo de 2016, en el Municipio de la Ceja Antioquia, tal como se acredita con el registro civil de defunción aportado a folios 3 del anexo *037SolicitudDePronunciamientoDeLasPartes.pdf*

-Que los jóvenes Paola Andrea, Ana María, Diana Carolina, Juan Felipe, Verónica Johana Londoño Serna y Jhoana Marcela y Edwin Fernando Londoño Cifuentes son herederos determinados del señor Luis Fernando Londoño Bolívar, conforme se acredita con los registros civiles de nacimiento obrantes a folio 32, 34, 36, 115, 118, 123 y 126 del anexo *001Demanda .pdf* y los señores Magdalena Naranjo de Hincapié, Sandra Milena y Andrés Fernando Holguín Martínez, son sucesores procesales del codemandante Gildardo Holguín (anexo 38)

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si es procedente revocar la providencia de primera instancia, para en su lugar declarar la existencia de la relación laboral entre los señores Juan Guillermo Londoño Bolívar, Gildardo Holguín y Luis Fernando Londoño Bolívar y los accionados Julieta González, Antonio Velásquez Lara y Diego Mauricio Velásquez González, los dos primeros representados por sus herederos determinados Ester Julieta Velásquez González, Olga Rocío Velásquez González, Diego Mauricio Velásquez, así como con el señor David Velásquez Echeverri, en los extremos alegados en el libelo inaugural o los obtenidos por aproximación, para consecuentemente condenar a los accionados al reconocimiento de las acreencias laborales y los aportes a sistema de seguridad social reclamados en el proceso.

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis, según la cual no se prueba la prestación personal del servicio por parte de los accionantes en los extremos pretendidos en el libelo inaugural, ni están acreditados los supuestos fácticos y jurídicos para que los mismos sean establecidos por aproximación, a excepción del periodo laborado por el señor Juan Guillermo Londoño Bolívar al servicio del señor Diego Mauricio Velásquez Echeverri comprendido entre 01 de enero de 1999 y el 31 de octubre de 2010, respecto al cual se omitió el pago de los aportes al sistema de seguridad social entre el 01 de octubre de 2001 y el 01 de octubre de 2008, siendo procedente ordenar respecto a este codemandante el pago de las referidas cotizaciones en mora, con los correspondientes intereses moratorios a satisfacción de Colpensiones, por lo tanto la sentencia debe ser REVOCADA PARCIALMENTE en el numeral primero y CONFIRMADA en lo demás.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

El contrato de trabajo

El artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo define el contrato de trabajo como *“aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración.”* El trabajo humano, en todas sus formas, goza de la especial protección del Estado (artículo 25 de la Constitución Política), pero los principios que gobiernan el derecho sustantivo laboral, no son aplicables a aquellos trabajos que están por fuera del escenario de subordinación, como ocurre frente a contratos de carácter civil o comercial.

En esta misma dirección se entroniza el concepto de contrato realidad que tiene fundamento en el principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formas que eligen las partes en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, de donde se concluye que con independencia de la denominación del contrato, lo que determina el surgimiento de los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, lo es la confluencia de los tres elementos que definen el contrato de trabajo, establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo.

Conforme a la citada norma, son tres los elementos que permiten la configuración de un contrato de trabajo, el primero, la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; el segundo, la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, lo cual debe mantenerse por todo el tiempo o duración del contrato y el tercer elemento, el salario como retribución del servicio.

En ilación con la anterior previsión, el artículo 24 ibídem, modificado por el artículo 2 de la Ley 50 de 1990, consagra una presunción legal del elemento subordinación, una vez acreditada la prestación personal del servicio:

“ARTICULO 24. PRESUNCIÓN. Modificado por el art. 2, Ley 50 de 1990. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.”

En desarrollo de tal presunción, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha estructurado una línea jurisprudencial pacífica y uniforme, en torno a cómo se distribuyen las responsabilidades probatorias entre el empleador y el trabajador, criterio expuesto entre otras, en las sentencias SL39259 del 17 de abril de 2013, SL4027 del 08 de marzo de 2017 y más recientemente en sentencia SL 2295 del 24 de mayo de 2022 *“Lo anterior significa, que al actor le basta con probar la prestación o la actividad personal, para que se presuma el contrato de trabajo y es a la empleadora a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado el operario.”*

2.4. Los extremos de la relación Laboral

Sin duda, la prestación personal del servicio debe ser acreditada en un marco temporal, esto es, es necesario establecer los extremos de la relación, los cuales corresponden al periodo de vigencia del contrato de trabajo, fecha de inicio y de terminación, durante el cual se ejecutan las obligaciones derivadas del mismo, esencialmente, la prestación personal del servicio por parte del trabajador y el pago del salario y los demás derechos mínimos e irrenunciables a cargo del empleador.

La prueba de los extremos del vínculo de trabajo, conforme a la jurisprudencia consolidada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,

también corresponde al trabajador, así ha sido precisado, entre otras, en las sentencias CSJ SL radicado 41890 del 24 de abril de 2012 y sentencia SL16110 (43379) del 4 de noviembre de 2015, en las cuales se rememora la sentencia radicación 36549 de 5 de agosto de 2009, indicando:

“Más sin embargo, lo dicho no significa que el demandante quede relevado de otras cargas probatorias, y que con la presunción de que trata el citado artículo 24 del C. S. de T. nada más tiene que probar, pues además de corresponderle al trabajador la prueba del hecho en que esa presunción se funda, esto es, la actividad o prestación personal del servicio, con lo que se estable que ese trabajo fue dependiente o subordinado, mientras la contraparte no demuestre lo contrario, también al promotor del proceso le atañe acreditar otros supuestos relevantes dentro de esta clase de reclamación de derechos, como por ejemplo el extremo temporal de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización de la terminación del vínculo, entre otros.

Conviene decir, que de antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado.”

No obstante, en el cometido de procurar una decisión material que garantice efectivamente los derechos del trabajador, también la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha impuesto al juez laboral el deber de establecer por aproximación los extremos de la relación laboral cuando no exista prueba de los mismos

Al respecto, la misma Corporación en sentencias Rad. 25580, del 22 de marzo de 2006, reiterada en decisiones Rad. 33849, del 28 de abril de 2009, Rad.

421676 de marzo de 2012, SL-905 del 04 de diciembre de 2012 (37865) y en pronunciamiento más recientes como las providencias SL 1621 del 03 de mayo de 2017 (49346) SL, 42167 6 mar. 2012 y SL2148 de 2018, señaló:

*“(...) Aunque no se encuentra precisada con exactitud la vigencia del contrato de trabajo, esta podría ser establecida en forma aproximada acudiendo a reiterada jurisprudencia sentada desde los tiempos del extinto Tribunal Supremo del Trabajo, según la cual **cuando no se puedan dar por probadas las fechas precisas de inicio y terminación de la relación laboral**, pero se tenga seguridad de acuerdo con los medios probatorios allegados sobre la prestación del servicio en un periodo de tiempo que a pesar de no concordar exactamente con la realidad da certeza de que en ese lapso ella se dio, habrá de tomarse como referente para el cálculo de los derechos laborales del trabajador.*

En sentencia de 27 de enero de 1954, precisó el Tribunal Supremo:

<Si bien es cierto que la jurisprudencia de este Tribunal ha sido constante en el sentido de que cuando quien debe demostrar el tiempo de servicio, y el salario devengado, no lo hace, no hay posibilidad legal para condenar al pago de prestaciones, salarios o indemnizaciones, es también evidente que cuando de las pruebas traídas a juicio se puede establecer sin lugar a dudas un término racionalmente aproximado durante el cual el trabajador haya servido, y existan por otra parte datos que permitan establecer la cuantía del salario devengado, es deber del juzgador desentrañar de esos elementos los hechos que permitan dar al trabajador la protección que las leyes sociales le garantizan>.

La aplicación del precedente en cita, está sometida a la exigencia de que se hallen plenamente demostrados otros periodos efectivamente laborados o por lo menos elementos para establecerlos por aproximación. Al igual que se requiere que se haya probado el salario y la jornada laboral.

2.6. CASO CONCRETO

Inicialmente se precisa que no se controvierte en apelación la inferencia del fallador de primer grado en torno a que se acreditó que los señores Juan

Guillermo Londoño, Gildardo Holguín y Luis Fernando Londoño, prestaron sus servicios personales en la Hacienda La Sultana, ubicada en el Municipio de Bolívar, Santander, en favor de los señores Antonio Velásquez Lara, Julieta González y Diego Alberto Velásquez González, desconociéndose en qué periodos.

La prestación del servicio no pudo ser ubicada temporalmente toda vez que los gestores del proceso, sus sucesores y herederos no lograron probar los extremos del vínculo laboral. Contrario a lo que argumenta la parte apelante a este propósito no contribuyen los testimonios recaudados, pues el señor ***Norberto Villareal Sosa***, expresó conocer a los señores Juan Guillermo Londoño Bolívar, Gildardo Holguín, y Luis Fernando Londoño Bolívar, exponiendo como razón de su conocimiento que es pescador y trabaja en el río Ermitaño, en el municipio de Bolívar Santander, por el camino a la finca La Sultana, que veía a los trabajadores demandantes subir todos los días hacia la finca, indicó que allí laboró Juan Guillermo Londoño como mayordomo, Gildardo Holguín, como encargado de oficios varios y Luis Fernando Londoño, como vaquero, que visitaba la finca cada 15 o 20 días, no obstante no recuerda las fechas en que conoció a los trabajadores ni sabe las fechas de ingreso y retiro del servicio, también afirmó que los trabajadores vivían los tres solos en la misma finca donde laboraban.

Respecto al señor Juan Guillermo Londoño, indicó que lo conoce hace aproximadamente 35 años y que sabe que actualmente labora en La sultana, pero no conoce quien es el empleador, afirmando que el patrono era alguien de nombre David y que solo conoció a otro señor de nombre Diego, de quienes no sabe el apellido.

Por su parte la señora **Ana Lubinia Molina** declaró que conoce a Juan Guillermo y Luis Fernando Londoño Bolívar, porque vivía en la finca La Sultana, con quien era su esposo el señor Gildardo Holguín, afirma que ella residió también en la finca pero no tiene presente cuanto tiempo, ni en qué año entró, ni en qué año salió, afirma que a su esposo lo contrató Antonio Velásquez el dueño de la finca, que cuando llegó a la finca los señores Juan Guillermo y Luis Fernando ya vivían ahí, pero asegura que ella no *“le pone cuidado a las fechas”* no sabe en periodo fue eso, no sabe cuándo ni cuanto le pagaban y solo recuerda que les pagaba el señor Antonio Velásquez. Finalmente, ante la insistencia de la poderhabiente judicial de los promotores del proceso, indicó que estuvo varios años en la finca, y salió cuando se separó de su esposo, refiriendo que su hija mayor tenía aproximadamente 10 años y el menor 6 años.

Ninguno de los testigos da cuenta de los extremos de la relación laboral de los trabajadores y si bien respecto al señor Juan Guillermo Londoño el testigo Norberto Villareal, afirma que hace 35 años lo conoció como trabajador de la finca y que actualmente continúa laborando allí, no puede desconocerse que la razón del conocimiento del testigo, resulta débil en cuanto no se determinó el sector donde pescaba, pues resulta abstracto tener como base el cauce del río Ermitaño, tampoco se probó la continuidad en esa actividad de pesca durante más de 40 años, adicionalmente no se entiende porque el señor Villareal asegura que veía todos los días al señor Juan Guillermo desplazarse hacia la finca y a la par afirma que éste vivía allí; tampoco el horario que afirma cumplían los trabajadores de 800 am a 4:00 pm, concuerda con lo afirmado por el propio demandante quien dijo que trabajaban hasta las 6:00 de la tarde.

Ahora bien, también el demandante afirma que continúa prestando sus servicios a los empleadores, sin embargo no hay certeza de quien es su empleador, teniendo en cuenta que el mismo aporta al expediente un contrato de arrendamiento suscrito entre los herederos determinados de la señora

Julieta González, hoy accionados, fechado el 10 de marzo de 2017, donde se entrega el uso y goce de la finca “La Sultana” a este último, sin que se logre dilucidar si el demandante celebró un contrato de trabajo con el arrendatario o si hubo una sustitución patronal, atendiendo a que el uso y goce de la finca La Sultana fue entregado al arrendatario, aunado a que en el interrogatorio refiere que su empleadora actual es la señora Olga Rocío Velásquez González.

De otra parte, el testimonio de la señora Lubinia Molina, presenta varias contradicciones que le restan credibilidad, habida cuenta que el señor Norberto Villareal indicó que los codemandante vivían solos en la finca, mientras la testigo, afirma que ella también vivió allí con el señor Gildardo Holguín y sus dos hijos, de otra parte, el demandante Juan Guillermo Londoño en su interrogatorio expuso que el señor Gildardo ingresó el 02 de febrero de 1995 y que desde 1992, el propietario Antonio Velásquez había liquidado la sociedad conyugal y la finca le había correspondido a la señora Julieta González, siendo contradictoria la versión de la señora Lubinia quien afirma que a su compañero lo contrató el señor Antonio Velásquez y era este quien le pagaba el salario.

Respecto a esta misma testigo, ha de puntualizarse que los datos que aporta atinentes a que vivió en la finca con el trabajador fallecido muchos años, hasta que su hija mayor tenía 10 años de edad y su hijo menor 6 años, hito temporal que sugiere la apoderada apelante se tome como extremo inicial de la relación laboral del señor Gildardo Holguín, no son coincidentes con las fechas afirmadas en el libelo incoativo de la demanda y en el interrogatorio del señor Juan Guillermo Londoño Bolívar, en tanto Sandra Milena Holguín, nació el 3 de diciembre de 1976 y Andrés Fernando Holguín, el 13 de agosto de 1983, (véase registros civiles de nacimiento glosados en el anexo 038 folios 10 y 13), es decir, la hija mayor tenía 10 años para el 03 de diciembre de 1986, fecha en la cual no había iniciado el vínculo laboral. Asimismo, la sucesora procesal del señor Holguín, Magdalena Naranjo de Hincapié, aportó al expediente

declaración extrajuicio de los señores AURELIO MARTINEZ BAHOS y MARLENY MARTINEZ RIOS, en la cual se asegura que la sucesora convivía con el causante desde hacía 18 años para la fecha de la muerte, que se recuerda lo fue el 22 de mayo de 2016, lo que indica que la convivencia con la nueva compañera permanente debió iniciar en 1998, solo tres años después de la fecha en que se afirma inició la relación laboral del señor Holguín, siendo ello discordante con el dicho de la testigo Lubidia Molina, en el sentido de que vivió muchos años en la finca. No pasa tampoco inadvertido la Sala que en el mismo documento se afirma que el demandante trabajaba en una finca distinta a La Sultana, al dar constancia los declarantes que *“el núcleo familiar dependía económica y alimentariamente del señor GILDARDO HOLGUIN, **quien laboraba en una finca llamada La Estrella**”*. (negrilla de la Sala)

Respecto al señor Luis Fernando Londoño Bolívar, ninguno de los testigos suministró información adicional, solo que trabajó en la finca “La Sultana”, que era hermano del señor Juan Guillermo Bolívar y trabajaba como vaquero, no teniendo tampoco a disposición la Sala, ningún parámetro a efectos establecer las fechas en que inició y terminó la relación laboral alegada.

En este contexto no es posible definir los extremos por aproximación de la relación laboral con los accionados de los señores Juan Guillermo Londoño Serna, Luis Fernando Londoño Serna y Gildardo Holguín, pues no hay certeza de la prestación del servicio en los periodos aducidos en el libelo inaugural ni en otros que hayan resultado probados en el proceso y si en gracia de discusión se admitiera que el vínculo laboral con el señor Juan Guillermo Londoño Bolívar, continúa vigente, no se estableció que la prestación del servicio se cumpla en favor de las personas que fueron llamadas a resistir las pretensiones.

No obstante debe la Sala excepcionar la anterior afirmación, respecto al señor Juan Guillermo Londoño, toda vez que se aportó la historia laboral actualizada

al 04 de agosto de 2017, anexo 46 folios 11 a 13, la cual da cuenta de la afiliación por parte del empleador Diego Mauricio Velásquez González, número patronal 70190.869, para el 01 de enero de 1999, efectuando cotizaciones hasta el 31 de octubre de 2010, prueba documental de la cual es posible deducir la relación del trabajador con el citado codemandado, por los extremos correspondientes al 01 de octubre de 1999 hasta el 31 de octubre de 2010.

Pues el a quo consideró que los derechos que pudieran derivarse de ese periodo están prescritos, pasando por alto el carácter imprescriptible de los aportes a seguridad social, constatando la Sala, que, en efecto, en estos extremos, como lo argumenta la apoderada recurrente, no hubo continuidad en las cotizaciones, dado que el empleador omitió el pago de los ciclos correspondientes a 01 de octubre de 2001 hasta el 01 de octubre de 2008, equivalentes a 360.01 semanas, sin que efectuara novedad de retiro, encontrándose, en consecuencia, en mora en el pago de este periodo.

Consecuentemente procede revocar parcialmente la decisión que se revisa en apelación para condenar al codemandado DIEGO MAURICIO VELASQUEZ GONZALEZ, a efectuar el pago de los aportes pensionales con sus respectivos intereses a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, correspondientes al interregno 01 de octubre de 2001 al 01 de octubre de 2008, sobre un salario base de cotización equivalente al mínimo legal de cada anualidad. Para tal efecto, se ordenará a Colpensiones liquidar el valor de los aportes e intereses dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria del presente fallo y al codemandado proceder al pago, a satisfacción de Colpensiones, dentro de los 30 días siguientes a la liquidación respectiva.

Finalmente, en relación con las costas procesales se REVOCA parcialmente el numeral segundo de la providencia revisada en apelación para condenar en

costas en primera instancia al señor DIEGO MAURICIO VELASQUEZ GONZALEZ, en favor del señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO BOLIVAR, las cuales serán fijadas por el fallador de primer grado.

Por último, se anota no es posible atender la solicitud formulada en los alegatos ante esta instancia por la apoderada de la entidad pública en torno a condenar en costas a los accionantes en su favor, por no haber sido apelada la decisión, dentro de la oportunidad procesal y existir una condena parcial respecto al codemandante Juan Guillermo Londoño Bolívar.

En consecuencia, se **REVOCARÁ PARCIALMENTE** el numeral primero y segundo de la sentencia confutada.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **REVOCA PARCIALMENTE** la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Décimo Laboral de Circuito de Medellín, el 31 de octubre de 2022, en el proceso ordinario instaurado por los señores JUAN GUILLERMO LONDOÑO BOLÍVAR, GILDARDO HOLGUÍN, sucedido procesalmente por Magdalena Naranjo de Hincapié, Sandra Milena y Andrés Fernando Holguín Martínez y los herederos del señor LUIS FERNANDO LONDOÑO BOLIVAR, Luis Esteban, Verónica y Juan Felipe Londoño Serna, Jhoana Marcela y Edwin Fernando Londoño Cifuentes representados por Zoraida Cifuentes en contra de COLPENSIONES,

DIEGO MAURICIO VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, los herederos indeterminados y determinados de los señores JULIETA GONZÁLEZ y ANTONIO VELÁSQUEZ LARA, Ester Julieta, Olga Rocío y Diego Mauricio Velásquez González, al cual se vinculó por pasiva al señor DAVID VELASQUEZ ECHEVERRI, y en su lugar **SE CONDENA** al codemandado DIEGO MAURICIO VELASQUEZ GONZALEZ, a efectuar el pago de los aportes pensionales con sus respectivos intereses en favor del señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO BOLIVAR a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, correspondientes al interregno 01 de octubre de 2001 al 01 de octubre de 2008, sobre un salario base de cotización equivalente al mínimo legal de cada anualidad. Para tal efecto, se ORDENA a Colpensiones liquidar el valor de los aportes e intereses causados, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria del presente fallo y al señor DIEGO MAURICIO VELASQUEZ GONZALEZ proceder al pago, a satisfacción de Colpensiones, dentro de los 30 días siguientes a la liquidación respectiva.

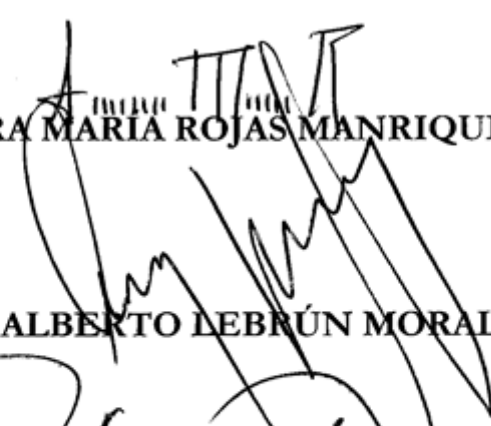
2.- Se **REVOCA** el numeral segundo de la providencia revisada en apelación y en su lugar se CONDENA en costas en primera instancia al señor DIEGO MAURICIO VELASQUEZ GONZALEZ, en favor del señor del señor JUAN GUILLERMO LONDOÑO BOLIVAR, agencias en derecho que serán fijadas por el fallador de primer grado.

3.- Costas en esta instancia a cargo del codemandado DIEGO MAURICIO VELASQUEZ GONZALEZ, inclúyanse en la liquidación agencias en derecho en el valor de un salario mínimo legal \$1.160.000.

4.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

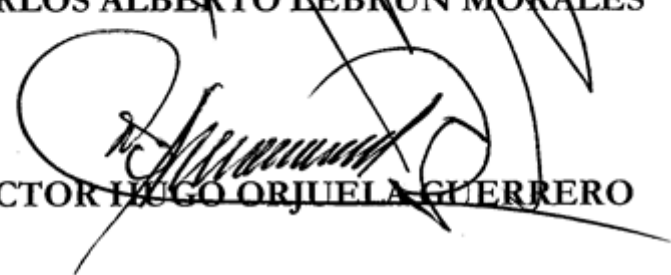
El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO